



Bogotá, dos (02) de junio de dos mil veintidós (2022).

**RADICACION:** 11001-33-35-010-2021-00052-00  
**DEMANDANTE:** DIANA PAOLA GÓMEZ GONZALEZ  
**DEMANDADO:** DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
**MEDIO DE CONTROL:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO  
DEL DERECHO

Ingresando el expediente al despacho para resolver lo pertinente, sería del caso impulsar la actuación a una siguiente etapa, de no ser porque avista el despacho dentro de la oportunidad procesal pertinente, la configuración de una excepción previa dentro del presente trámite, susceptible de ser declarada oficiosamente.

## I. ANTECEDENTES

1.- La señora Diana Paola Gómez González, por intermedio de apoderado judicial, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, instauró demanda contra Bogotá Distrito Capital- Secretaría de Educación de Bogotá, con el fin de que esta jurisdicción realice las siguientes declaraciones y condenas:

*“PRIMERA. - Que en la diligencia de conciliación la Secretaría de Educación allane a la declaratoria de nulidad del acto administrativo complejo que sustancialmente revoca el nombramiento en periodo de prueba de la señora DIANA PAOLA GÓMEZ GONZALEZ a través de:*

*-Oficio de Radicado E-2020-37718  
-Oficio de radicado E-2020-26426  
-Resolución 2616 del 30 de septiembre de 2019  
-Resolución 5456 del 11 de abril de 2019  
-Resolución 7746 del 21 de junio de 2019*

*SEGUNDA. - Que a título de restablecimiento del derecho se disponga sin solución de continuidad, la vinculación de señora DIANA PAOLA GÓMEZ GONZALEZ que venía desarrollando con excelencia”*

2.- Con auto de veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021), este Juzgado resolvió admitir la demanda, y ordenó la notificación de la parte accionada y el traslado correspondiente.

3.- La entidad Distrito Capital- Secretaría de Educación de Bogotá D.C., allegó escrito de contestación, oponiéndose a las pretensiones de la demanda y exponiendo sus razones de defensa que apuntan a defender, tanto la legalidad de los actos acusados, como la caducidad del presente medio de control. No se propuso excepción previa alguna en la contestación

4.- De las excepciones perentorias propuestas, por Secretaría se corrió traslado a la parte demandante, quien efectuó pronunciamiento frente a lo propuesto por la entidad demandada.



## II. CONSIDERACIONES

5.- Las excepciones previas, se encuentran taxativamente dispuestas en el artículo 100 del C.G.P., como se ve a continuación:

- “1. Falta de jurisdicción o de competencia.*
- 2. Compromiso o cláusula compromisoria.*
- 3. Inexistencia del demandante o del demandado.*
- 4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.*
- 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.**
- 6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.*
- 7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.*
- 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.*
- 9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.*
- 10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.*
- 11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada”.* (Negrilla del despacho)

6.- Frente a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, el Consejo de Estado ha precisado que dicha excepción ha de configurarse cuando ocurre alguna de las hipótesis que se expone a continuación:

*“18. En tal sentido, el Despacho recuerda que el ordenamiento jurídico colombiano, numeral 5º del artículo 100 del CGP, consagra de manera expresa la excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, la cual se encuentra encaminada fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del proceso.*

*19. Cabe resaltar que dicha excepción se configura por dos razones:*

***a) Por falta de los requisitos formales: en este caso prospera la excepción cuando no se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de la demanda regulados en los artículos 161, 162, 163, 166 y 167 del CPACA, en cuanto indican qué debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan las pretensiones y los anexos que se deben allegar con ella.***

***b) Por indebida acumulación de pretensiones: esta modalidad surge por la inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 137, 138, 140, 141 y 165 ibídem.”***<sup>1</sup>

En el caso concreto, el Despacho constata que la excepción en cita está llamada a ser declarada oficiosamente, habida cuenta que efectuada la confrontación de la demanda con los dispositivos normativos enunciados, en efecto, no reúne algunos requisitos necesarios para que culmine con una sentencia de mérito.

7.- En primer lugar, este despacho considera que no se cumple uno de los requisitos

<sup>1</sup> Consejo de Estado, S.C.A., Sección Primera, Rad. Nro. 08001-23-33-000-2018-00355-01, 03 de diciembre de 2021, CP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.



formales para demandar, dado que la parte actora no agotó el ejercicio de un recurso en sede administrativa que era obligatorio, contra el acto administrativo Resolución 5459 de 11 de abril de 2019.

Revisado el contenido de dicho acto, el mismo fue claro en establecer en el numeral segundo de su parte resolutive, que contra dicha resolución *“procede el recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales pueden interponerse por escrito ante el Jefe de la Oficina de Escalafón Docente en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, según el caso”*.

Frente al tema del recurso de apelación contra actos administrativos, el artículo 76 del CPACA establece que cuando el mismo proceda, interponer el mismo es obligatorio para acceder ante la autoridad judicial posteriormente. La norma en referencia indica:

*“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. (...)”*

***Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, (...).***

***El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.***

*Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.”* (Negrilla del despacho)

De lo anterior se colige, además, que el recurso de apelación se presenta ante el funcionario que profirió la decisión impugnada, lo anterior, independientemente de cual funcionario será responsable de resolver de fondo un respecto recurso de apelación.

Así las cosas, para poder acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa a fin de controvertir la Resolución Nro. 5459 de 11 de abril de 2019, la demandante tenía la obligación de interponer el recurso de apelación en contra de dicho acto administrativo, presentándolo ante la funcionaria que dictó la decisión apelada (Jefe Oficina de Escalafón Docente), a fin de que el mismo fuera resuelto por el funcionario competente.<sup>2</sup>

Revisados los antecedentes aportados con la demanda, así como los hechos de la misma, es dable colegir que la parte actora solo interpuso recurso de reposición sin formular el correspondiente el recurso de alzada contra el acto administrativo demandado Resolución 5459 de 11 de abril de 2019 (a su vez mal enunciado en la demanda como Resolución 5456).

La situación en comento, constituye la ausencia de un requisito formal para demandar, habida cuenta que según lo dispone el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, *“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. (...)”*, para este caso, el recurso de apelación que era obligatorio.

<sup>2</sup> Decreto 1278 de 2002. *“ARTÍCULO 17. Administración y Vigilancia de la carrera docente. La carrera docente se orientará a atraer y a retener los servidores más idóneos, a promover el desarrollo profesional y el mejoramiento continuo de los educadores y a procurar una justa remuneración, requiriendo al mismo tiempo una conducta intachable y un nivel satisfactorio de desempeño y competencias. Será administrada y vigilada por las entidades territoriales certificadas, las cuales, a su vez, conocerán en primera instancia de las reclamaciones que se presenten en relación con la aplicación de la carrera. La segunda instancia corresponderá a la Comisión Nacional del Servicio Civil”*.



Lo acaecido, impide la resolución de fondo de todas las pretensiones de la demanda, habida cuenta que aun cuando se estudiara la legalidad de los demás actos Resolución 7746 del 21 de junio de 2019 (que resolvió el recurso de reposición) y Resolución 2616 del 30 de septiembre de 2019 (que revocó el nombramiento en periodo de prueba de la accionante), al no haberse interpuesto el recurso obligatorio contra la resolución que dio origen a dichos actos administrativos, este acto primigenio no es pasible de control judicial, que impide efectuar un debido restablecimiento del derecho, como sería el del reintegro de la demandante al cargo que venía desempeñando en la entidad demandada.

8.- De igual manera, este despacho considera que no se cumple un requisito de contenido de la demanda, en tanto que la parte actora en dicho libelo no plasmó las normas violadas por los actos administrativos demandados ni el concepto de violación respectivo, siendo este un requisito expreso de contenido, consagrado en el artículo 4 del artículo 162 del CPACA.

En Consejo de Estado ha sostenido que la ausencia absoluta de normas violadas y su concepto de violación genera la ineptitud sustantiva de la misma. Al respecto ha citado dicha Corporación, lo siguiente<sup>3</sup>:

“A este respecto, esta Corporación ha manifestado que **la excepción previa de inepta demanda procede cuando existe ausencia absoluta de invocación normativa y concepto de violación**, por lo que el reproche que plantea la demandada será un asunto de fondo que se analizará en la sentencia. Sobre el punto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 24 de octubre de 2018, manifestó lo siguiente:

*“Es clara la importancia que este requisito reviste a efectos de estudiar la eventual nulidad del acto administrativo atacado, pues dicha argumentación es la que delimita el estudio de fondo que debe adelantarse en la sentencia correspondiente por parte del juez, sin embargo, la aplicación desmedida de este requisito procedimental no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la administración de justicia, porque lo que debe garantizarse es la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, lo contrario, sería afectar o quebrantar derechos de arraigo constitucional.*

*Debe precisarse además que este presupuesto, relacionado con los fundamentos de derecho de las pretensiones, tiene una doble connotación, primero, dota de aptitud formal a la demanda teniendo en cuenta que constituye un presupuesto procesal que debe ser analizado en la etapa inicial para la correspondiente admisión y segundo, **permite materializar el debido proceso, toda vez que asegura el derecho de defensa de la parte pasiva de la litis lo que finalmente limita el estudio de fondo que se realizará en la sentencia.***

*Finalmente debe recordarse que los requisitos de la demanda no se pueden someter a un riguroso estudio, en razón a que si bien el derecho procedimental estipula requisitos para demandar, no quiere decir que de forma estricta deban ser exigidos, máxime cuando se podría llegar a vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la administración de*

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López, proveído de 21 de julio de 2021, Radicación número: 11001-03-24-000-2019-00129-00



*justicia*<sup>4</sup>.<sup>5</sup>(Se destaca)

En este mismo sentido, en auto proferido el 12 de agosto de 2020<sup>6</sup>, la Sección Primera esta Corporación, en providencia unitaria del presente Despacho, reiteró la señalada postura jurisprudencial, **indicando nuevamente que la excepción previa de inepta demanda procede cuando existe ausencia absoluta de invocación normativa y concepto de violación**. También se indicó que, si la parte actora invoca las normas superiores que estima infringidas y sustenta las razones de la presunta violación de aquellas, es suficiente.” (Negrillas del despacho)

Revisado el escrito de demanda objeto de este trámite, se observa que aun cuando trae un acápite de “FUNDAMENTOS DE DERECHO”, por ningún lado de ese acápite se indicó cuál o cuáles fueron las normas violadas con el contenido de todas y cada una de las decisiones tomadas por la administración, en los actos demandados oficio E-2020-37718, oficio E-2020-26426, Resolución 2616 del 30 de septiembre de 2019, Resolución 5456 (sic) del 11 de abril de 2019 y Resolución 7746 del 21 de junio de 2019. Al no enunciarse las normas violadas, tampoco se explicó el concepto de su violación.

En consecuencia, la demanda carece también, del requisito de contenido desarrollado en este punto, lo que hace que se configure la ineptitud sustantiva de la misma.

Por los anteriores motivos, el Despacho de oficio decretará la inepta demanda y ordenará el archivo del presente proceso. En mérito de lo expuesto, este Despacho.

#### RESUELVE:

**PRIMERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTA DEMANDA**, por las razones enunciadas.

**SEGUNDO:** En firme esta decisión, procédase al archivo de este proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

**AUGUSTO LLANOS RUIZ**  
**JUEZ**

A.O.R-

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, CP: Gerardo Arenas Monsalve, 26 de enero de 2015. Radicación: 23001-23-33-000-2013-00024-01(4588-13).

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Auto del 24 de octubre de 2018. Proceso radicado número: 08001-23-33-000-**2014-00015**-01. Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

<sup>6</sup> CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020), Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00268-00, Actor: ASOCIACIÓN MUTUAL ECO AMBIENTAL DE CALI, Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE – MINAMBIENTE.

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz  
Juez Circuito  
Juzgado Administrativo

010  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eac652fae3532cf5e23ee080e176e2ef77d8f17099fdce1dcbf735e04a42082f**  
Documento generado en 02/06/2022 11:51:49 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>